



## **Asesinar a la UNAM**

*(Beatriz Pagés, pág. 4-5)*

Otra vez, como en los momentos más oscuros de su historia, la autonomía de la UNAM vuelve a estar en riesgo. Ahora amenazada por la bestia autoritaria de un régimen depredador que busca apoderarse del cerebro y corazón de México.

El presidente López Obrador hace las veces de un vulgar porro, de un provocador que intenta desestabilizar a la comunidad universitaria para que sus gorilas siembren un movimiento estudiantil que exija la renuncia del rector y cuestione la legitimidad de los órganos de gobierno.

Se trata de un plan perverso, urdido por el círculo más dogmático y radical, más resentido y pedestre de la 4T en contra de la máxima Casa de Estudios. Ahí están los Taibo, los Ackerman y los Max Arriaga. Ahí está la misma Sheinbaum haciendo las veces de marioneta de Palacio.

¿Qué buscan? Apoderarse de la UNAM, punto. Representan esa ala de izquierda estaliniana que pretende acabar con la libertad de cátedra para imponer el pensamiento único de una izquierda obsoleta, que sólo ofrece atraso y mediocridad.

Y no solo se trata de apoderarse de las directrices académicas y culturales. En el fondo hay algo más grave: buscan hacer de la UNAM un centro de operación político electoral al servicio del régimen.

Desde ese laboratorio universitario se pretende incubar un semillero de votos a favor de Morena, hacer que los estudiantes acuñen una estructura de movilización que defienda los intereses “cuatroteístas”.

Y entonces, ocurrirá lo que sucede en toda dictadura bananera. Los estudiantes aprobarán, sólo en la medida en que repitan sin error el código doctrinario y participen eficazmente en la defensa del caudillo redentor.

Hay que decirlo fuerte y claro: López Obrador quiere asesinar a la autonomía de la UNAM. Es decir, quiere matar la libertad de cátedra. Ni siquiera un Díaz Ordaz, con todos sus excesos, se atrevió a tanto. Muchos presidentes de México han tratado de subordinarla a sus intereses sexenales, pero ninguno intentó –como se hace hoy– poner a la universidad pública bajo el control absoluto del Estado.

Lo decíamos ayer. La contrarreforma eléctrica puede ser la antesala de otras expropiaciones. Casi nada, la expropiación de una de los centros académicos y de investigación más grandes de América Latina. El gobierno busca clausurar la mente de los mexicanos.



Hemos escuchado a los líderes más lúcidos de la UNAM salir a defender los derechos de la máxima Casa de Estudios. Pero hoy se antoja preguntar: ¿Quién está hablando a los estudiantes? ¿Quién se dirige a ellos para advertirles que está en juego no solo el futuro de su universidad, sino su libertad y la libertad de la nación?

Cuando López Obrador acusa a la universidad de haberse derechizado, de tener profesores fifis y neoliberales, de ser unos burgueses silenciosos al servicio del gran capital, no se está dirigiendo al cuerpo académico, sino a los estudiantes.

Lo que está haciendo el presidente con toda esa vocación insidiosa que lo caracteriza es inyectar veneno en el ánimo de los universitarios más pobres. Haría falta poner una bocina en lo más alto de la Torre de Rectoría para que los mismos estudiantes le exijan al tabasqueño que no se entrometa y respete el orden jurídico de la institución.

La integridad de la UNAM no había vuelto a estar, desde el 68, en una situación de tan alto riesgo. Esto obliga a recordar la advertencia que el rector Javier Barros Sierra dirigió en ese momento a los estudiantes: “Estén alertas a los provocadores”.

Alertas para impedir el más criminal de los asesinatos. Si muere la autonomía de la UNAM también morirá la esencia de México: su libertad.

### **Una nueva caravana y ...** *(Eduardo Campos, pág. 50-51)*

¿Cuál es la solución al tema migratorio en los Estados Unidos? Una pregunta que desde hace muchos años flota en muy diversos espacios; en el político, en el social y, sin duda, en el económico y bueno sobre ello quiero hacer algunas reflexiones.

Representantes de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública (DPS), según ha trascendido, se preparan para enviar a puntos estratégicos “miles” de soldados adicionales de la Guardia Nacional, cifra que podría llegar hasta 3 mil. El gobernador republicano, Greg Abbott, está utilizando recursos estatales para luchar en contra de la inmigración indocumentada, la cual está registrando cifras históricas de arrestos en la frontera y presentar batalla contra las políticas migratorias de la Administración del presidente Joe Biden, al que acusa de provocar la actual situación.



Se estiman en más de 6 mil el número de inmigrantes que integran la caravana que marcha rumbo a los Estados Unidos, y que buscan recorrer toda la república mexicana para llegar a la frontera y entonces ver la forma de cruzar y llegar a la llamada “tierra prometida, la de las oportunidades o las que les ofrece simplemente una vida mejor”, no importa el precio que tengan que pagar, en algunas ocasiones incluso la vida misma.

Las autoridades de inmigración arrestaron casi a 72 mil personas sin documentos en el período fiscal 2021, la cifra más baja en una década, sobre todo después de las 104 mil capturas en el año anterior, según datos publicados por el periódico The Washington Post. Entre los años 2017 y 2019, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo un promedio anual de unos 148 mil arrestos, mientras que en 2011 las capturas efectuadas fueron 322 mil, todas estas cifras muy lejos de las registradas en el pasado año fiscal.

Desde la llegada de Joe Biden a la presidencia, los arrestos han disminuido sustancialmente por una política del gobierno federal que da prioridad a la captura y deportación de individuos que han cometido crímenes y terminó con las redadas masivas de inmigrantes indocumentados en sitios de trabajo (del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021). A pesar de ello, el gobernador texano, Greg Abbott, movilizó tanto a la Guardia Nacional como a oficiales del DPS para vigilar y arrestar inmigrantes indocumentados como parte de la operación “Estrella Solitaria”. Desde el pasado mes de marzo y hasta mediados de octubre se han arrestado a mil 300 migrantes bajo cargos de ingresar en propiedades privadas en su camino hacia el interior de los Estados Unidos, mientras que más de 700 mil han sido entregados a la Patrulla Fronteriza. Los soldados serán desplegados en puntos considerados como “vulnerables” y aseguran que su objetivo no será detener familias migrantes.

Mientras este fenómeno sigue preocupando y ocupando a la Casa Blanca, los dueños de empresas empiezan a “enloquecer” en busca de trabajadores para evitar la quiebra, cumplir compromisos y contratos, así como reactivar la economía a como de lugar. Es fácil por estos días leer, ver o escuchar, por ejemplo, que a grandes compañías les urge contratar a miles de trabajadores, ofreciéndoles “facilidades extraordinarias” para desarrollar una carrera ahí, además de bonos y flexibilidad para seguir estudiando. Para esta temporada de fin de año, por ejemplo, Amazon busca 150,000 empleados; la misma cantidad que Walmart, en tanto que, Target y UPS quieren contratar a 100,000, y FedEx a 90,000.

Pero sucede que la respuesta sigue siendo prácticamente nula.



Paralelo a esa necesidad imperiosa que Estados Unidos tiene en el ámbito laboral en este momento, somos testigos de que la reforma migratoria tan anhelada parece escurrirse entre las manos con debates cada vez más flojos, planes rechazados por una asesora legal del Senado y una angustiante falta de claridad en los siguientes pasos a seguir.

Por eso, en una situación de crisis, el pragmatismo y el sentido común deberían imperar. Ya se sabe que el laboral es un mercado volátil y que los empleados tienen derecho a buscar mejores opciones. ¿Quiénes han cubierto históricamente esos huecos que deja la mano de obra estadounidense que se desplaza siempre hacia el siguiente nivel en el escalafón ascendente del trabajo? Pues nada menos que la comunidad inmigrante. Así ha sido siempre. De tal modo que la pregunta es: ¿qué espera la clase política para resolver de una vez por todas, no sólo el problema migratorio, sino subsanar todas las pérdidas causadas por la pandemia, incluidas las laborales?

Los trabajadores indocumentados, al igual que los beneficiarios de TPS (trabajadores temporales) y de DACA, han demostrado con creces el valor que tiene su participación en momentos de mayor necesidad. Y ahí están, sin echarse para atrás y demostrando lo esenciales que son y han sido en la historia laboral estadounidense. Qué mejor momento para regularizar su situación migratoria, sobre todo cuando el mercado laboral sufre una merma tan escandalosa como la de ahora.

Es cierto, no es tan simple pero tampoco tan complicado ni imposible como para no poder tomar la decisión correcta, de este modo, no sólo se resolvería la crisis de empleo de inmediato, sino el estatus migratorio de millones y se reacomodaría automáticamente el ámbito socioeconómico. Se requiere, sin duda voluntad y decisión política.

Habría que comentarle a los Senadores que se enfoque más en la realidad; social, laboral y migratoria de Estados Unidos, que en el burocrático y protocolario mundo de las reglas del aparato legislativo cuando tome sus decisiones, las cuales, hasta el momento siguen perjudicando a 11 millones de seres humanos. Que no se le olvide, por otra parte, que por ahí viene ya caminando otra caravana de migrantes que seguramente se convertirá en la siguiente generación de indocumentados si sus integrantes logran pasar a territorio estadounidense.